



**SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL Y ACLARACIÓN DE VOTO**

Medellín, trece de marzo de dos mil veinticuatro

<b>Tipo de pretensión:</b>	Responsabilidad contractual
<b>Procedencia:</b>	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín
<b>Demandante:</b>	Miguel Ángel Amaya Pérez.
<b>Demandados:</b>	AHV Construcciones S.A.S.
<b>Radicado:</b>	<b>05001 31 03 008 2019 00454 01</b>

Con el debido respeto expreso mi disenso parcial y aclaro el voto frente al proyecto votado por la mayoría en los siguientes términos:

Un problema jurídico debió ser el referente central para la solución del caso: ¿Se probó la existencia de un contrato de obra entre Miguel Ángel Amaya Pérez y la empresa AHV Construcciones S.A.S., del cual se deriven obligaciones solidarias para Meco Infraestructura S.A.S. y Concesión Alto Magdalena S.A.S.? Por cierto, la respuesta a este interrogante de la Sala, en caso de no ser probado ese contrato, conducía a un nuevo dilema sobre qué sucede con los posibles efectos que tiene una apariencia engañosa de contrato que impida o dificulte el ejercicio de derechos laborales del demandante y de terceros. En este sentido vale preguntar por la competencia que puede tenerse para declarar esa apariencia y tomar las medidas pertinentes para restituir la posibilidad de reclamar tales derechos ante el juez competente.

Ese fueron los dilemas que inicialmente presenté como dilema, y que fueron discutidos suficientemente en sala, antes de mi ponencia fuera derrotada. En esta se propuso adicionar la sentencia del 4 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito Medellín, declarando que:

(...) en la ejecución de la obra de drenaje a todo costo para el mejoramiento del corredor vial Honda – Puerto Salgar – Girardot, sector Cambao-Puerto Bogotá, entre las Abcisas Km. 90+300 y km 126+000, se presentó una *apariencia engañosa* imputable a AVH Construcciones S.A.S. y a Meco Infraestructura S.A.S., consistente en presentar al demandante Miguel Ángel Amaya Pérez como contratista civil y empleador de personas que trabajaron en esa obra, siendo en realidad trabajadoras directas de AVH Construcciones S.A.S., incluyendo al propio demandante.

Para prevenir que esa apariencia engañosa consolide situaciones jurídicas que impidan o dificulten el ejercicio de derechos laborales, con el objeto de restituir a las partes al estado en que se hallarían de no haber existido tal apariencia, se declara

que los términos de prescripción para alegar la causación y exigir el pago de las prestaciones salariales contenidas en la cláusula ante la autoridad competente, comenzarán a correr nuevamente a partir de la notificación de esta providencia.

Asimismo, en la ponencia originaria se propuso confirmar numeral primero de la sentencia, mediante el cual se desestimaron las pretensiones de la demanda, y no condenar en costas.

Esa propuesta de confirmar la desestimación de lo pretendido por el juzgado de origen, impone que mi salvamento de voto sea solo parcial. No obstante, las razones que me llevaron a proponerle a la Sala la confirmación parcial y a adicionar la providencia de primera instancia distan de las consideraciones que presenta el magistrado José Omar Bohórquez como nuevo ponente.

Ni comparto buena parte de lo manifestado sobre la congruencia, ni tampoco las consideraciones ofrecidas sobre legitimación en la causa.

Esas razones disenso las expreso de la siguiente manera:

1. El primer supuesto de la responsabilidad contractual es que se pruebe la existencia de un contrato. Si el demandante se afirma como el artífice de una obra civil que realizó pero que no se le pagó y pretende el pago de la remuneración pactada, para que su pretensión esté llamada a prosperar debe resultar acreditado lo siguientes supuestos: 1. Que hubo un acuerdo de voluntades; es decir, que el demandado encargó la obra al demandante 2. Que el demandante cumplió con sus obligaciones; es decir, que entregó al demandado la obra que éste encargó. 3. Que el demandado no pagó la remuneración pactada. El marco regulativo del contrato de obra se encuentra en los artículos 2053 y s.s. del Código Civil.

Ahora bien, ¿cómo debe decidirse si encuentra que, aunque hubo un contrato entre el demandante y el demandado debido al cual el primero ejecutó efectivamente una obra a favor del segundo; no hay en cambio evidencias de que se trate de un contrato civil, sino indicios de que el vínculo sería laboral?

La diferencia entre un contratista civil de una obra y un trabajador en una obra civil se relaciona con el grado de autonomía e independencia de cada uno de ellos en relación con su tarea. Mientras el contratista de obra trabaja sin que medie una relación de subordinación y dependencia del contratante en la ejecución de la obra, el trabajador está sometido a las condiciones regulares del contrato de trabajo que implica esas condiciones. La diferencia en el vínculo conlleva diferencias consecuentes en el marco legal de la relación contractual y las obligaciones correlativas, tanto como en la competencia judicial y el procedimiento respectivo de su procesamiento. Se trata, en fin, de dos contratos distintos: el de obra civil y el de trabajo en una obra civil que, aunque puedan orientarse a un mismo resultado -la construcción de una obra-, suponen condiciones subjetivas diferenciadas tanto en el objeto, como en la causa y sobre todo en los medios de ejecución del contrato.

En ese orden de ideas, si el demandante funda sus pretensiones en un contrato civil de obra, probando su participación en ella con trabajo, pero sin acreditar las condiciones necesarias relativas al encargo y a la autonomía e independencia en su ejecución como contratista, en principio se impone simplemente denegar las pretensiones, por no satisfacerse el presupuesto básico de la responsabilidad contractual: la prueba del contrato

(civil de obra). En principio, el juez civil no sólo carece de competencia para pronunciarse sobre las posibles relaciones laborales subyacentes -pues esto corresponde al juez laboral, a través del procedimiento respectivo-; sino que de asumir esa competencia incurriría en una incongruencia manifiesta, en atención a lo dispuesto en el artículo 281 del CGP.

Sin embargo, esa consideración cambia por lo menos parcialmente cuando se presenta la siguiente condición: el demandado que contrató la participación del demandante en la obra haya incurrido en conductas originarias de una *apariencia engañosa* de contrato civil, que a su vez haya impedido al demandante y/o a terceros la discusión, la reclamación u otras formas de ejercicio efectivo de sus derechos laborales y prestacionales. Si se da esta condición, entonces corresponde al juez *declarar* la apariencia engañosa y *adoptar* las medidas necesarias para garantizar que los efectos del engaño no impidan la discusión judicial de los derechos laborales comprometidos, por la configuración de fenómenos como la prescripción.

Considérese este ejemplo: la empresa constructora M contrata a la empresa constructora H para que realice una obra determinada. A su vez, la empresa H contrata a la persona natural P para que ejecute la obra, en calidad de trabajador jefe de obra, a cargo de otros trabajadores. Sin embargo, durante la negociación de ese vínculo, la empresa H dio lugar a que se creyera que P no era un simple trabajador, sino un contratista encargado de la ejecución de la obra y empleador directo de los demás trabajadores. La apariencia engañosa habría obstaculizado o impedido el ejercicio de los derechos laborales del demandante y de los terceros trabajadores, porque estos habrían esperado el pago e intentado el cobro a su aparente empleador, P, quien a su vez alega no haber obtenido el pago del contratante H. Los trabajadores pierden la oportunidad de cobrar al verdadero empleador, H y M, bajo la apariencia de que P es quien está obligado a pagar.

En distintos supuestos, la ley civil y comercial reconocen que la apariencia de un contrato puede tener efectos jurídicos. Es el caso de la simulación, el error, el dolo, el mandato aparente, por mencionar sólo algunos. En casi todos los supuestos, incluyendo los mencionados, la consecuencia jurídica que acompaña la ley a la verificación judicial de la apariencia es restituir las cosas al estado en que deberían encontrarse, restando los efectos jurídicos de la apariencia. Así, por ejemplo, en la simulación absoluta, se deja sin efectos al contrato simulado, con restituciones. En el error o el dolo, se anula el efecto del contrato en razón de la evidencia de una apariencia que afectó la voluntad de contratar, con restituciones. En el contrato aparente, se le da valor vinculante a la apariencia para preservar los derechos del contratante de buena fe, obligando a las prestaciones a las que haya lugar. Es decir, el deber del juez de valorar y atribuir los efectos jurídicos de la apariencia engañosa se refleja en múltiples figuras del sistema jurídico privado.

La diferencia entre esos supuestos de la apariencia y la nulidad y el de nuestro ejemplo, reside en que la apariencia que impide el ejercicio de derechos laborales no surge como consecuencia de una pretensión directamente encaminada a que ésta se reconozca (como en la simulación, la nulidad, el mandato aparente, el error, etc.), sino que se halla en el marco de un proceso donde pretende hacerse valer los efectos jurídicos del negocio aparente. Es decir, no hay petición expresa de parte para reconocer la apariencia o un efecto concreto derivado de ella, porque cuando el proceso inicia la parte actúa bajo el influjo de esa misma apariencia engañosa, que sólo durante el proceso se revela.

Sin embargo, no en todos los casos, ni siquiera en el marco de los procesos civiles, la declaración de una irregularidad manifiesta que genera efectos jurídicos y la adopción de

las medidas consecuenciales para restituir las situaciones jurídicas al estado que se debe, deben ser pedidas por la parte. El caso más claro es el de la nulidad absoluta -art. 1741 del Código Civil-. Si en un contrato se incurre en un objeto o causa ilícita, el juez debe advertirlo, declararlo y tomar las medidas correctivas incluso de oficio -art. 1742 ibídem.

En otro caso asimilable a este en algunos puntos, en sentencia 7 de dic. 2021, Radicado 05001 31 03 008 2019 00286 0), y con ponencia del suscrito se desestimó una pretensión de cumplimiento contractual que se presentó con base en un supuesto contrato de prestación de servicios. Al valorar la prueba, la Sala encontró que a través de se contrato civil se estaba intentando mutar una obligación laboral en una obligación civil, encontrando configurado un objeto ilícito.

Ahora bien, si con el objeto de preservar el orden jurídico y los derechos de los trabajadores, el juez civil puede anular incluso de oficio un contrato o una cláusula de un contrato viciado de nulidad de absoluta ¿no puede tomar asimismo medidas de oficio, para prevenir que una apariencia engañosa relativa a un proceso bajo su conocimiento, dificulte o impida el ejercicio de derechos laborales? Es decir, ¿no puede actuar para impedir que con su decisión se consolide una situación de imposibilidad de discutir y reclamar derechos legítimos, en razón de una apariencia engañosa que resultó probada en el proceso bajo su conocimiento?

El artículo 281 sobre la congruencia pareciera persistir como una dificultad. Pero, resulta claro que la condición específica de que se aparente engañosamente un contrato dificultando el ejercicio de derechos laborales, no es un supuesto previsto por el legislador al regular la congruencia; se trata de una realidad no prevista por el legislador, que desde luego plantea un problema de congruencia. Pero, como en el caso de la nulidad absoluta, la potestad judicial puede expresarse incluso de oficio cuando se trata de abrir garantías a derechos prevalentes o preservar el orden jurídico.

Por otro lado, si el juez civil encuentra una relación laboral subyacente, ello supone la aplicación prevalente de sus reglas y principios. -art. 20 Código Sustantivo del Trabajo-. Estas incluyen la favorabilidad para el trabajador- art. 21- . Por su parte, el art. 50 del Código Procesal del Trabajo relativiza la congruencia de la sentencia laboral, en la medida que el juez puede condenar a sumas mayores a las pedidas *“cuan los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados”*. Es decir, siempre que se preserve el debido proceso en cuanto a la discusión de los hechos en los que se basa la decisión, el juez puede tomar decisiones no pedidas *para garantizar el pago de salarios y prestaciones laborales a favor de los trabajadores*, en caso de que se adeuden.

En conclusión: en línea de principio, el juez está sometido a la congruencia. Excepcionalmente, cuando se trata de amparar derechos prevalentes y el orden jurídico, el juez puede decidir por fuera del litigio planteado por las partes, como ocurre por ejemplo con la nulidad absoluta. Si lo que se halla es una *apariencia engañosa* cuyo efecto es dificultar o impedir la reclamación efectiva de los derechos laborales prevalentes o el orden jurídico, de manera asimilable a otros supuestos de apariencia y especialmente a la nulidad absoluta, el juez debe tomar las medidas necesarias para restituir esa posibilidad truncada por el engaño. La interrupción de la prescripción es una medida efectiva de posibles acreencias laborales prescritas y que optimiza el debido proceso de ambas partes, y que previene que se utilice los contratos y los procesos civiles como un posible medio para defraudar o dificultar el ejercicio de los derechos de los trabajadores.

En un Estado Social de Derecho, la labor del juez, no sólo la del juez de tutela sino de todo juez, es preservar la Constitución y los derechos fundamentales. El carácter social del Estado implica un compromiso especial de de las instituciones en general y de los jueces en particular con los trabajadores y con los sujetos más desventajados de la sociedad o de especial protección. Ni siquiera en el caso del juez civil se trata sólo de resolver pretensión resistida. Se trata en primer lugar de una función pública, comprometida con unos valores constitucionales y con impedir que las diferencias materiales en la negociación y ejecución de un contrato, o las apariencias engañosas que puedan darse, terminen desconociendo los derechos de la parte más débil de la relación, contrariando nuestro orden constitucional.

2. Ahora bien, en cuanto al caso concreto se tiene que las pretensiones se denegaron en la primera instancia bajo el argumento que ese contrato no se probó. Al revisar la prueba documental se observa el denominado “*modelo de contrato de ejecución parcial de obra*”, suscrito entre el señor Alberto Vanegas Álvarez, quien al pie de su firma se identifica como “*Gerente general AHV Construcciones*”. Si bien, al valorar el documento, se advierte que la persona que firma el documento no es el representante legal que aparece en el certificado de existencia y representación legal de la empresa, resulta problemática la conclusión de ausencia de legitimación en la causa por pasiva en relación con AHV Construcciones.

El primer punto es que, con base en la prueba disponible, no cabe ninguna duda que el demandante Miguel Ángel Amaya Pérez, y por lo menos los dos testigos que declararon en ese proceso afirmando ser sus trabajadores, Carlos José Hoyos Polo y Manuel Esteban Ávila Ruiz. Su versión es: Amaya Pérez nos contrató, nos pagaba los salarios, era el jefe; los pagos los hacía Amaya. Esta versión coincide con la rendida por Rosa Elena Prada Aragón, quien afirmó ser trabajadora de AHV Construcciones S.A.S. en la obrar, reconocer a Amaya Pérez como contratista y jefe de algunos de los trabajadores.

Las apoderadas de las sociedades demandadas se limitan a cuestionar la falta de precisión en los argumentos para probar los elementos de un contrato civil de obra -número de trabajadores, salarios, especificidades de la obra encargada-, pero no se presenta ninguna evidencia ni cuestionamiento directo respecto de que el demandante, los testigos u otros trabajadores del demandante o que bajo esa apariencia creyeron trabajar en la obra, no hayan efectivamente estado allí.

Así las cosas, aunque es cierto que según los certificados de existencia y representación legal que aportaron las partes, Alberto Vanegas Álvarez no es el representante legal de AHV Construcciones S.A.S., lo cierto es que el demandante y otras tres personas que afirman haber trabajado directamente con él en la obra, reconocen que éste prestó servicios en ella en calidad de contratista, como empleador de otros trabajadores. Cabe anotar que el demandante desistió de otros testimonios solicitados y decretados sobre esta misma situación, ante la contundencia incontrovertida de las tres declaraciones que se presentaron sobre este punto. Esta situación de presencia del demandante y los testigos como trabajadores en la obra, no mereció una valoración de peso en la sentencia de primera instancia.

¿Qué dicen las partes sobre esta situación? La parte demandante afirma que Alberto Vanegas Álvarez firmó ese documento como “cabeza” de AHV Construcciones S.A.S.; no problematiza con la falta de concordancia entre esa afirmación y el certificado de existencia y representación legal que esa misma parte aporta (cfr. c.001, arch. 003 fl. 206), donde se lee que la representante legal es otra persona, Lizeth Venegas Marín. Tampoco

se afirma que Vanegas Álvarez fuera el representante legal de la época, ni se precisa el vínculo con AHV.

No obstante, desde la misma demanda se afirma que ese documento, donde se fijaban por escrito algunos elementos del contrato, no agotaba el acuerdo contractual, predominantemente verbal, en lo referido a la forma de ejecución de las obras y al pago de la remuneración.

Es decir, lo que se afirma es que el acuerdo de voluntades lo conformaba el documento y los acuerdos verbales necesarios para ejecutar la obra y pagar el precio.

Ahora bien, en cuanto a la respuesta que sobre este punto específico dio la empresa AHV Construcciones S.A.S., aunque la demandada alega que ese documento no vincula a AHV porque lo firmó una persona distinta a su representante legal, **reconoce** la existencia de un vínculo tanto entre AHV y Alveiro de Jesús Vanegas Álvarez, por un lado; entre AHV y el demandante Miguel Ángel Amaya Pérez, por otro. Y entre Alveiro de Jesús Vanegas y Miguel Ángel Amaya Pérez, por otro.

Del conjunto de la contestación de la demanda resulta claro que Alveiro de Jesús Vanegas Álvarez era un agente de AHV, pues ésta reconoce que se habría celebrado un acuerdo “informal de voluntades” (refiriéndose al documento arriba reseñado), pero que no se “formalizó ni ejecutó”, porque lo que se hizo fue una contratación laboral directa. Es decir, según la constructora, Vanegas Álvarez suscribió el modelo de contrato como parte de tratativas contractuales que no llegaron a concretarse, por haberse dado otra modalidad contractual. Se infiere entonces por lógica que Vanegas Álvarez, aunque no fuera el representante legal, era efectivamente un agente de AHV, con poder real para realizar negociación que terminaban en vínculos jurídico-contractuales para AHV. Por lo menos, según su versión, la contratación laboral del demandante.

Por otro lado, en otros apartados de la contestación demanda, en concordancia con lo declarado unánimemente por los testigos, se reconoce por lo menos implícitamente que el demandante habría tenido trabajadores *proprios* en la obra.

Por su parte, Meco Infraestructura no niega, más bien acepta que AHV o alguno de sus agentes haya subcontratado al demandante o a su empresa. Su defensa se centra en alegar una inoponibilidad de cualquier obligación derivada de esa negociación, dada la relatividad de los contratos, la inexistencia de solidaridad y sobre todo la existencia de una cláusula en el contrato entre Meco y AHV, según la cual estaba prohibido ceder o subcontratar la ejecución del contrato. En un sentido similar va el argumento de la aseguradora, aunque cuestionando la eficacia del contrato escrito, por no haber sido suscrito por el gerente. La Concesión se limita a asumir la posición procesal de desconocer cualquier vínculo, demandado la exclusión de cualquier responsabilidad suya por no ser parte contractual, ni haber solidaridad.

Así las cosas, como lo afirma el demandante, lo sostienen los testigos y lo reconocen AHV, Miguel Ángel Amaya Pérez estuvo trabajando en la obra que Meco Infraestructura encargó a AHV Construcciones, en razón de un vínculo contractual con ésta última constructora, que se realizó a través del señor Alveiro de Jesús Vanegas Álvarez, agente de AHV en el lugar de la obra, aparentemente encargado de las contrataciones.

Entonces ¿fue ese vínculo de carácter civil, como sostiene la parte demandante o de

carácter laboral, como sostiene AHV Construcciones? Es decir, Miguel Ángel Amaya Pérez ¿era un contratista autónomo e independiente de AHV y empleador de los trabajadores en ese tramo de la obra?; o ¿era un trabajador subordinado, con funciones de jefe de obra sobre otros trabajadores de AHV Construcciones?

Por un lado, tenemos un documento-tratativa que se aporta con la demanda y que daría cuenta de que AHV Construcciones, o por lo menos su agente para contrataciones en la obra Alveiro de Jesús Vanegas Álvarez, tuvieron la intención de celebrar un contrato civil, donde Miguel Ángel Amaya Pérez pone la fuerza de trabajo propia y de sus trabajadores en la obra; a cambio de un precio. Con ese precio, Amaya Pérez pagaría salarios y su propio beneficio.

Esta es la versión del demandante, que coincide con el documento-tratativa y con la declaración de los testigos. Carlos José Hoyos Polo y Manuel Esteban Ávila Ruiz, claramente afirmaron haber trabajado en la obra y reconocen como su empleador al demandante. Su versión es: Amaya Pérez nos contrató, nos pagaba los salarios, era el jefe; los pagos los hacía Amaya.

Por su parte, también declaró Rosa Elena Prada Aragón, quien afirmó ser trabajadora de AHV Construcciones en el lugar de la obra. Señaló que conocía a Miguel Ángel Amaya Pérez porque había sido contratista de la empresa para la que ella trabajaba. Afirmó que él tenía sus propios trabajadores en la obra, lo sabe porque una de sus funciones era pasar la documentación a las oficinas de AHV en Medellín para su afiliación a la seguridad social. No hubo claridad sobre el pago de salarios de los trabajadores de Maya. La testigo también reconoce a Alveiro de Jesús Vanegas Álvarez como la persona encargada de AHV en el lugar de la obra.

Frente a esta hipótesis y a favor de la versión de que el vínculo sería laboral y no civil, se valora lo siguiente:

Los trabajadores se vinculaban como trabajadores de AHV, quien además realizaba los aportes a seguridad social, según reconocen partes y testigos. Es decir, más allá de la declaración de los testigos, no hay pruebas formales de que Amaya Pérez haya sido el empleador; ni prueba de pagos de salarios, ni contratos escritos, ni aportes a seguridad social, pues estos se hicieron con AHV Construcciones.

El documento que da cuenta de la tratativa sobre un contrato civil, si bien lo negoció y lo firmó un agente de la constructora, no era el representante legal de la sociedad según los certificados que se anexaron, ni tenía poder para obligarla.

Como indicio de conducta procesal se plantean los siguientes: frente a la hipótesis de la demanda, se valora en su contra de las pretensiones la falta de claridad en la afirmación de sus supuestos de hecho y de eficacia en el manejo del debate probatorio. Era carga de la parte demandante probar, más allá del vínculo contractual con la constructora en relación con la obra, *el carácter civil o comercial* de ese negocio; es decir, que efectivamente se trata de un contratista civil y no de un trabajador con un vínculo laboral.

No sólo las pruebas sino también las afirmaciones fácticas sobre las relaciones jurídicas subyacentes al contrato, resultan poco claras y escasamente soportadas. Si el demandante era un contratista, tendría que haber probado sus labores concretas como empresario de la construcción: las labores de vinculación y capacitación de trabajadores; las labores de

direccionamiento en la obra; las labores administrativas sobre pago de salarios y prestaciones sociales, etc. La afirmación y la prueba es insuficiente y poco concluyente en este sentido.

Por lo demás, tal y como insisten las demandadas, no hay claridad sobre los elementos mínimos de tal contrato de obra, ni siquiera en la afirmación de la demanda, tampoco en los documentos que se anexan.

En efecto, la base “documental del contrato” sería la tratativa firmada por Alveiro de Jesús Vanegas Álvarez como agente de AHV Construcciones y los 193 comprobantes de obra que darían cuenta de los trabajos efectivamente llevados a cabo por el demandante y sus trabajadores (cfr. c. 001 arch. 003, fls. 20 y s.s.). Estos comprobantes de obra dan cuenta de una actividad realizada por alguien en unas fechas, en un “formato de informe diario de actividades” con el sello de Meco. La firma del responsable no es la del demandante. No hay nada en el contenido o en la forma de ese documento, salvo tal vez la inferencia leve que puede deducirse de que esos documentos estén en poder del demandante, que permita concluir que ente Amaya Pérez y AHV se pactó un contrato de obra y no un contrato de trabajo.

Evidentemente, el hecho de que Amaya Pérez tenga y aporte esos documentos, en conjunto con la tratativa de acuerdo civil para contrato de obra y en concordancia con lo que dicen los testigos, los comprobantes hacen prueba por lo menos indiciaria de una relación contractual entre el demandante y AHV Construcciones. Sin embargo, ni toda esa prueba en conjunto permite concluir sobre los elementos mínimos de un contrato civil de obra. Esto es: la obligación de realizar una obra material, de manera independiente y autónoma; sin mediar subordinación y representación de AHV Construcciones.

En consecuencia, por no probarse la existencia de un contrato civil de obra ente Amaya Pérez y AHV, las pretensiones no están llamadas a prosperar y por esto debía confirmarse la sentencia de primera instancia; pero no por las razones que se explican en la nueva ponencia que ahora aprueba el Tribunal por mayoría.

**3. Sobre las medidas de protección a los derechos prevalentes derivadas de la apariencia engañosa.** Pienso que la confirmación de la decisión de primera instancia, por las razones anteriormente expuestas, no obstaba a que se hiciera un pronunciamiento adicional, con el fin de garantizar en la mayor medida posible los derechos de los trabajadores.

Las sociedades demandadas, según se probó en este proceso, dieron lugar a una *situación aparente* que generó un *engaño* a un número plural de trabajadores de la obra, comenzando por el propio demandante Amaya Pérez y los tres testigos que declararon en este proceso. Esta situación *aparente* se configuró cuando AHV Construcciones S.A.S. de manera activa, a través de su agente Alveiro de Jesús Vanegas Álvarez; y las demandadas Meco Infraestructura S.A.S. y Concesión Alto Magdalena S.A.S., por omisión; dieron lugar a que el demandante considerara, tanto como los testigos que declararon en este proceso, que Miguel Ángel Amaya Pérez era contratante de AHV Construcciones S.A.S., empleador de los trabajadores y por tanto el acreedor de sus obligaciones laborales.

Para concluir sobre este hecho, se valoran las declaraciones de AHV en la contestación, el documento tratativa y las declaraciones testimoniales, según ya se consideró. Todos los declarantes, incluida la empleada de AHV, Rosa Elena Prada Aragón, reconocen al demandante como contratista.



También se valora como un indicio de conducta procesal frente a la configuración de una apariencia engañosa, que su representante legal no haya acudido al interrogatorio de parte y su apoderado no haya asistido a las audiencias. Si esto se suma a los demás elementos de prueba, tenemos conductas omisivas de parte que no contribuyen al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, existen indicios de conducta a favor de una situación de apariencia engañosa de parte y Meco Infraestructura S.A.S. y de Concesión Alto Magdalena S.A.S., en relación con sus posiciones en el contrato respecto de AHV.

Si bien es cierto que el demandante no contrató directamente con esas sociedades, no es menos cierto que, según ha reconocido la jurisprudencia, el contratante es solidariamente responsable en conjunto con el contratista por las obligaciones salariales y prestacionales de los trabajadores, bajo ciertas condiciones. Esta obligación solidaria supone no sólo la oponibilidad de una condena judicial por esa causa, sino sobre todo una obligación sustancial de verificar en cada caso el cumplimiento pleno de las condiciones laborales de los trabajadores en la obra, así hayan sido contratados por el contratista. Es decir, en tanto se trata de una obligación propia (solidaria), el contratante debe verificar cuales son sus obligaciones laborales con los trabajadores que contrate el contratista. Esto supone el deber de verificar todos los elementos de la relación laboral, para asumir en concreto las contraprestaciones correspondientes que le corresponden; o bien verificar su cumplimiento directo por parte del contratista.

Contrario a ese deber, las demandadas asumen posiciones procesales que denotan que la ejecución de la obra por los trabajadores, o la forma concreta como ésta se prestaba o remuneraba, no fuera asunto suyo sino sólo de AHV Construcciones. Es decir, simplemente se niega un contrato directo con el demandante, sin desconocer con contundencia y pruebas su participación directa en la obra que ellos mismos encargaron, o la calidad del vínculo en razón del cual se realizó ese trabajo.

Cierto que la Concesión encargó la obra a Meco y Meco a AHV, con la idea de que fuera esta última quien ejecutara la obra. Pero, dada la obligación solidaria respecto de las acreencias laborales, que supone un conocimiento propio de las relaciones laborales subyacentes, era deber de todas las demandadas y ciertamente de Meco Infraestructura, tener claridad sobre si el demandante participó o no en la obra y en qué calidad. Si era o no parte de los trabajadores con los que ejecutaron la obra, a favor de quienes contrajeron obligaciones solidarias. Es tan clara la obligación de Meco en este sentido, que hace parte del riesgo asegurado en la póliza de cumplimiento respecto del contrato con AHV en el contrato de seguro con Liberty.

Siendo así, una conducta procesal leal, por lo menos de Meco Infraestructura, tendría que haber llevado a aclarar la situación fáctica sobre si el demandante trabajó o no en la obra y en qué calidad, en lugar de asumir posiciones que impliquen un aprovechamiento de la apariencia engañosa. Como estas claridades no se dieron, la parte contribuyó con su conducta omisiva a configurarla.

Esta omisión procesal no es más que la contrapartida de una omisión sustancial de base: no basta que Meco haya prohibido la subcontratación o cesión del contrato a AHV. Su trabajo consistía en verificar la regularidad de las relaciones laborales de la obra, incluida las relativas a los trabajadores que empleó AHV. Lo anterior, por ser estas relaciones fuente de obligaciones propias para Meco. Si Meco hubiera asumido esas obligaciones propias, cuando AHV dio lugar a la apariencia engañosa; entonces Meco habría podido

dar en este proceso las claridades pertinentes sobre la relación del demandante con la obra, así como del cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Con lo acá considerado, resulta claro que en la ejecución del contrato entre el demandante y AHV Construcciones, se dio lugar a que el demandante y los testigos pensaran que Amaya Pérez era un contratista empleador y no simplemente otro trabajador. También es claro que esa apariencia es imputable en primer lugar a AHV Construcciones por la acción de su agente contratista, como se ve en la tratativa y declaran los testigos; y también a Meco Infraestructura por la omisión del deber de verificar la regularidad de las relaciones laborales.

Ahora se precisa en qué consiste el engaño, así como la competencia. La apariencia de qua Amaya Pérez era el contratista, según afirman sin cuestionamientos serios el demandante y los tres testigos, llevó a que los trabajadores consideraran que era éste su empleador y que a él debían cobrar los pagos. Según afirma uno de ellos, esto le habrían dicho también en las oficinas de AHV Construcciones, quienes a su vez se excusaban de pagar a Amaya Pérez alegando falta de pagos de Meco Infraestructura. Es decir, en primer lugar, la *apariencia* pondría al demandante como *deudor* de obligaciones laborales y *acreedor* de una obligación civil derivada de un contrato civil de obra.

En segundo lugar, prevendría que los trabajadores pudieran hacer un cobro directo y efectivo de sus derechos salariales y prestacionales a AHV o a Meco, quienes desde Medellín y Bogotá se enriquecían con el trabajo que ellos hacían directamente con sus manos en la obra, porque reconocían como su acreedor directo a Amaya Pérez, antiguo compañero y empleador con el que había confianza y ya habían trabajado antes, según declararon.

De hecho, la presentación misma de esta demanda da cuenta de que la apariencia no sólo afectó al demandante, a los testigos, probablemente a muchos otros trabajadores (en la demanda se habla de 45), sino también a los propios abogados, que fundaron en la apariencia su reclamación. Esto previno que en primera instancia no se discutiera el fondo del asunto; si las demandadas apropiaron o no un trabajo del demandante y los trabajadores en la obra; o si lo remuneraron adecuadamente, ante el juez laboral competente; si tuvieron en cuenta o no la tratativa como parte del factor salarial por mandato aparente, etc. En su lugar, se terminó por declarar que no se probó la realidad de una apariencia engañosa, al declarar la falta de legitimación en la causa, por haberse tramitado el asunto ante un juez civil como un problema de responsabilidad contractual.

Se aclara, el suscrito no está concluyendo que el demandante o quienes se afirman como sus trabajadores sean titulares de obligaciones laborales insatisfechas a cargo de las sociedades demandadas. Lo que encuentra probado es que hay una apariencia de engaño que previno el ejercicio efectivo de esos derechos y por lo menos evidencia sumaria (no controvertida) de que se adeudan conceptos laborales. Sin embargo, declarar la existencia de obligaciones laborales es competencia de los jueces laborales, a petición de parte interesada.

Ante la verificación de una apariencia engañosa de contrato civil que previene el ejercicio de derecho ¿qué puede hacer el juez civil? Declarar la existencia de la apariencia engañosa y tomar las medidas necesarias para que tales apariencias no obstaculicen el derecho de los trabajadores a realizar las reclamaciones que consideren pertinentes, con base en la realidad del contrato. Esto de manera similar a lo que se hace en caso de nulidad absoluta,

para prevenir que un acto engañoso, prevenga el ejercicio de derechos legítimos.

Así las cosas, en este caso debió declararse que AHV Construcciones S.A.S., a través de uno de sus agentes, contribuyó a generar una apariencia engañosa que previno que el demandante, los dos testigos que en este proceso se reconocen como sus trabajadores y probablemente otros trabajadores que no son parte ni rindieron declaración, pudieran comprender y ejercer adecuadamente sus derechos labores frente a las demandadas en tanto deudoras solidarias de los mismos.

En consecuencia, como medida para prevenir que la apariencia engañosa se convierta en un impedimento insalvable para el derecho a reclamar y obtener las contraprestaciones laborales que eventualmente se deban, debió declararse que los términos de prescripción de las eventuales obligaciones laborales derivadas de la ejecución de la obra que contrató Meco Infraestructura con AVH Construcciones, *cuando la relación laboral se haya visto afectada por la apariencia engañosa*, incluidas las acreencias laborales del propio demandante, sólo comenzarán a contarse a partir de la expedición de la sentencia en la que se declare esa certeza sobre la apariencia de contrato civil de obra que encubrió la relación laboral.

De una manera similar a las consecuencias derivadas de la nulidad de un acto jurídico aparente -art. 1746 del C. Civil-, la declaración de una apariencia engañosa con efectos jurídicos, conlleva a la restitución que haya lugar para restituir las cosas al estado en que se encontrarían, de no haber operado la apariencia engañosa.

Como en este caso la apariencia que desfiguró el vínculo laboral, conllevando a que se intentara el cobro de una prestación civil o comercial, la estipulación de restitución debe hacerse tomando ello en consideración, de modo tal que el objeto del conflicto -resolución de posibles acreencias laborales- pueda ser definido efectivamente bajo el estatuto legal y por la autoridad judicial competente, en concordancia con la realidad del contrato. Para el efecto es pertinente aplicar de manera extensiva la regla de interrupción de la prescripción prevista en el artículo 2539 del Código Civil.

Esta medida podría calificarse de incongruente, con base en lo dispuesto en el artículo 281 del CGP. Sin embargo, se considera que lo dispuesto literalmente en esa disposición no es plenamente aplicable a este caso, ni excluye la validez de la decisión que acaba de enunciarse, por dos razones fundamentales: primero, porque se está decidiendo conforme a los hechos afirmados y probados en el litigio, con plenas garantías de contradicción. Segundo, porque si bien lo que se declara concretamente no se está pidiendo, si dejara de tomarse la medida, eventualmente podría estarse coadyuvando a la defraudación de derechos salariales, prestacionales o indemnizaciones laborales.

El hecho de que al contrato aparente que se intentó hacer cumplir subyazcan relaciones laborales fuente de obligaciones laborales, supone la aplicación prevalente de sus reglas y principios. -art. 20 Código Sustantivo del Trabajo-. Estas incluyen la favorabilidad para el trabajador-. El art. 50 del Código Procesal del Trabajo relativiza la congruencia de la sentencia laboral, en la medida que el juez puede condenar a sumas mayores a las pedidas *“cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados”*. Es decir, siempre que se preserve el debido proceso, el juez puede tomar decisiones no pedidas para garantizar el pago de salarios y prestaciones laborales a favor de los trabajadores, aplicable por analogía al caso.

Podría argumentarse que esa competencia se refiere exclusivamente a los litigios que

conozca el juez laboral, en un procedimiento laboral, regidos por el código laboral; no en un proceso de responsabilidad contractual frente a un juez civil. A consideración de la Sala, la jurisdicción es una sola y el deber del juez del Estado Social de Derecho es usar las herramientas jurídicas disponibles para evitar que la desigualdad material entre las partes de un contrato, y la posibilidad correlativa de generar situaciones aparentes o confusas sobre su naturaleza jurídica o los sujetos obligados, termine comprometiendo los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores.

Atentamente,



**MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ**  
Magistrado